María Elena y Mónica Quispe vs. República de Naira.

Memorial del Estado

Índice

Bibliografía.....	2
Tabla de abreviaturas.....	8
Exposición de los hechos.....	10
Análisis legal del caso.....	12
Análisis de admisibilidad.....	12
Incompetencia <i>ratione temporis</i> para examinar la presunta violación del derecho contenido en el art. 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”.....	12
Análisis de fondo.....	14
El Estado de Naira no ha violado las obligaciones contenidas en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará.....	14
El Estado de Naira no ha violado los derechos contenidos en los arts. 4, 5 y 6 de la CADH en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento.....	19
El Estado de Naira no ha violado los derechos contenidos en el art. 7 de la Convención Americana en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento.....	25
El Estado de Naira no ha violado los derechos contenidos en los arts. 8 y 25 de la CADH en relación al art. 1.1 de dicho instrumento.....	30
Petitorio.....	37

Bibliografía

1.1. Documentos legales

1.1.1. Sistema Universal de Derechos Humanos

Convención de Viena sobre derecho de los tratados.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Comité contra la Tortura: Observación general no. 1: “Aplicación del art. 3 en relación con el art. 22 de la Convención” .21 de Noviembre de 1997.

CEDAW. Recomendación general no. 28 relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el art. 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. C/GC/28. 16 de diciembre de 2010.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

1.1.2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer (Belém do Pará).

CIDH, “Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de Violencia y Discriminación”, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003.

CIDH. “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas”. 20 enero 2007.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68.

CIDH. “Derecho a la verdad en las américas”. OEA/ ser.L/V/II.152.Doc.2. 13 de Agosto del 2014.

1.2. Libros

C. MEDINA QUIROGA y C. NASH ROJAS: “Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección”. Abril 2007.

Misuraca, M. “Art. 7. Derecho a la Libertad Personal”. *La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino*.

ONU: Doc. NNUU: A/5809, Anuario CDI 1976, vol. II (primera parte), en CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: “Principio de irretroactividad de los tratados, hechos continuados y competencia *ratione temporis*. Debates pasados, presentes y futuros en el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, en TORRES BERNÁRDEZ, S., FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, C., QUEL LÓPEZ, J., y LÓPEZ MARTÍN, A.G. (coords.): *El Derecho internacional en el mundo multipolar del siglo XXI. Obra homenaje al Profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez*, Iprolex, Madrid, 2013, (ISBN: 978-84- 941055-0-0).

1.3. Jurisprudencia

1.3.1.1. Sistema Universal de Derechos Humanos

1.3.1.1.1. Corte Internacional de Justicia

Caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Sentencia de 5 de febrero de 1970.

1.3.1.1.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TEDH. *Albert y Le Compte Vs. Belgica*. Sentencia del 10 de Octubre de 1983.

TEDH. *Aydin Vs. Turquía*. Demanda N° 23178/94. Sentencia del 25 de septiembre de 1997.

TEDH. *Opuz Vs. Turquía*. Demanda N° 33401/02. Sentencia del 9 de junio de 2009.

TEDH. Rantsev Vs. Chipre y Rusia, (núm. 25965/04). Sentencia de 7 de enero de 2010.

1.3.1.1.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos

1.3.1.1.3.1. Opiniones Consultivas

Corte IDH. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8.

Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9.

1.3.1.1.3.2. Casos Contenciosos

Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129.

Corte IDH. Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia 28 de enero de 2009. Serie C No. 194.

Corte IDH. Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.

Corte IDH. Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.

Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Sentencia de 4 de marzo de 2011. (Fondo, reparaciones y costas). Serie C No. 223.

Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171.

Corte IDH. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113.

Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.

Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214.

Corte IDH. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.

Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68.

Corte IDH. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165.

Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia De 30 De agosto de 2010. Serie C No. 215.

Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137.

Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua Sentencia de 29 de enero de 1997 (Fondo, Reparaciones y Costas).

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132.

Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271.

Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186.

Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275.

Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90.

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.

Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259.

Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250.

Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.

Corte IDH. Caso Servellón García y otros, Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152.

Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.

Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318.

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo) Serie C No. 1

Corte IDH. Caso Vélez Loo Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218.

Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277.

Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149

Corte IDH. Caso. Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo reparaciones y costas. Sentencia 4 de julio de 2007. Serie C. No. 165.

Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Corte IDH. Gudiel Alvarez y otros vs. Guatemala. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C No. 253.

Tabla de Abreviaturas.

Art.	Artículo
Arts.	Artículos
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIJ	Corte Internacional de Justicia
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
DDHH	Derechos Humanos
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
BME	Bases militares especiales
Obs. Gral.	Observación general
CV	Comisión por la verdad
PTCVG	Política de Tolerancia Cero a la Violencia de Género
ONG	Organización no gubernamental
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
No.	Número
Párr.	Párrafo
BPL	Brigadas por la libertad
OEA	Organización de estados americanos
Párrs.	Párrafos
Vs.	Versus
Sras.	Señoras

ONU/NNUU

Naciones Unidas

OC

Opinión consultiva

I) Exposición de los hechos

Naira es un Estado democrático, organizado bajo un sistema monista, cuyo territorio se encuentra dividido en 25 provincias y su población actual es de 20.000.000 habitantes. Fruto de su gran compromiso con los derechos de sus ciudadanos, el Estado no sólo ha ratificado todos los tratados internacionales de DDHH existentes a la fecha -incluyendo la CEDAW en 1981 y la Convención de Belém do Pará en 1996- sino que, además en el mismo año en el que adhirió a la CADH, aceptó la competencia de la Corte IDH. Incluso, la Constitución Nacional de Naira ha dispuesto en su art. 22 que dichos tratados poseen rango constitucional superior a las leyes de la nación.

Las presuntas víctimas del presente caso, son María Elena Quispe y su hermana, Mónica Quispe, quienes forman parte de una comunidad indígena, ubicada en la provincia de Warmi, al sur del país.

María Elena tiene un hijo junto a su esposo, Jorge Pérez. Ella ha decidido denunciar a éste último, el día 20 de enero del 2014, por una situación que encuadraría en violencia de género. Poco tiempo después fue interceptada en la calle por Pérez quien la insultó y golpeó. Acto seguido, éste último, fue detenido y sometido a juicio, donde se lo declaró culpable, y debió cumplir una sentencia de un año de prisión en suspenso. Meses más tarde, Jorge Pérez la buscó en su trabajo y la agredió, dejándola con invalidez parcial permanente. Lo que motivó a Mónica Quispe, (hermana de la Sra. María Elena Quispe) a hacer una denuncia gracias a lo cual, el Estado logró detener al Sr Pérez.

Dada la publicidad del caso, la hermana de María Elena se entrevistó con un canal de noticias. En dicha nota televisiva, la Sra. Quispe relató la vida y contexto familiar suyo y de su hermana, y comentó que habían sufrido, tanto ellas como otras mujeres, hechos de violencia por parte de los

oficiales de la BME en marzo de 1992, nunca denunciados por las víctimas. Sin embargo, días más tarde, tanto las autoridades de Warmi como sus propios vecinos negaron dichos hechos.

Empero, el Estado, fiel a su enorme compromiso y respeto por los DDHH, creó un Comité de Alto Nivel, así como una CV que se encuentran operando en el Estado de Naira desde inicios de 2016, las cuales actualmente están realizando trabajos de investigación, entrevistas y acopio de testimonios en las zonas afectadas por la serie de hechos de violencia que vivió Naira entre los años 1970 y 1999. Asimismo, se creó un Fondo Especial de Reparaciones que será asignado apenas la CV culmine con su informe. Respecto de los niños nacidos de violaciones sexuales, el Estado ha formado un Registro Público donde deberán ser inscriptos. Además, Naira se ha comprometido, a través de la figura de su Presidente a seguir atentamente el caso de tentativa de femicidio sufrido por María Elena así como lo referente a la custodia de su hijo.

Frente a la situación que están sufriendo en forma general, las mujeres del país, el Estado lanzó una serie de medidas específicas, agrupadas en la denominada Política de Tolerancia Cero a la Violencia de Género (PTCVG) con una partida extraordinaria presupuestal para que pueda implementarse de inmediato. Así como la próxima creación de una Unidad de Violencia de Género en la Fiscalía y en el Poder Judicial, la que incluirá medidas específicas de atención para las mujeres víctimas, además de capacitación y formación obligatoria para los jueces, fiscales y demás funcionarios y funcionarias y correlativamente la implementación de un Programa Administrativo de Reparaciones y Género.

Sin embargo, Killapura – una ONG que desde 1980 brinda asistencia legal en casos de violencia de género, que en 2014, asumió la defensa de las hermanas – no se encuentra satisfecha con las medidas tomadas por el Estado, por lo cual, el 10 de mayo del 2016 presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Naira interpuso el 10 de agosto de

2016 una excepción preliminar sobre la falta de competencia de la Corte *ratione temporis*, asimismo negó su responsabilidad en las violaciones de DDHH referidas. Igualmente, dio cuenta de todas las acciones que ha iniciado a favor de las presuntas víctimas y las mujeres en general. Siendo así, la CIDH siguiendo lo previsto en su Reglamento y en la Convención Americana, adoptó un Informe declarando admisible el caso y encontró violaciones a los arts. 4, 5, 6, 7, 8 y 25, todos en relación con el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe. Una vez cumplidos el plazo y los requisitos que marcan la Convención Americana y el Reglamento de la CIDH, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte IDH fijando audiencia para el 20 de septiembre del 2017.

II) Análisis legal del caso

1. Análisis de admisibilidad

Incompetencia *ratione temporis* para examinar la presunta violación a las obligaciones contenidas en el art. 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”

Conforme surge del art. 62.3 de la CADH, “*la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido*”, a partir de la ratificación del instrumento por parte del Estado en cuestión. La Corte Interamericana, por su parte, ha establecido la posibilidad de ejercer su competencia

contenciosa respecto a otros instrumentos interamericanos *‘en el contexto de instrumentos que establezcan un sistema de peticiones objeto de supervisión internacional en el ámbito regional’*¹.

La competencia de éste Tribunal en relación a la Convención Belém do Pará, ha sido ratificada en el caso “Campo Algodonero vs. México” afirmando su facultad para conocer peticiones que incluyan violaciones a las obligaciones contenidas en el art. 7 de la convención mencionada debido a que, el art. 12 de dicho tratado establece que la CIDH deberá considerar las peticiones presentadas, lo que, incluiría el envío de los casos a la Corte ya que así se encuentra establecido en la CADH en sus arts. 44 al 51².

Por otro lado, de conformidad al principio de irretroactividad previsto por el art. 28 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, instrumento utilizado por este Tribunal en casos como “Hermanas Serranos Cruz Vs. El Salvador”³ el Estado tiene conocimiento que conforme al mismo *“las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado”*⁴, sin perjuicio de la debida observancia de las obligaciones provisionales que se encuentran consagradas en el art. 18 de la norma internacional aludida. Asimismo, en su reiterada jurisprudencia, ésta Corte ha explicado que *“no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado que pudieran implicar su responsabilidad*

¹**Corte IDH.** Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 67.

²**Corte IDH.** Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 40.

³**Corte IDH.** Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 23 de noviembre de 2004. (Excepciones Preliminares), Serie C No. 118, párr. 64; Caso Alfonso Martín del Campo Dodd. Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 2004 Serie C No. 113. párr. 68; y Caso Cantos. Excepciones Preliminares, Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. supra nota 3, párrs. 35 y 37.

⁴Convención de Viena sobre derecho de los tratados, artículo 28.

*internacional son anteriores a dicho reconocimiento de la competencia”*⁵. La excepción a la regla de irretroactividad, según ha sentado jurisprudencia el Tribunal, es frente a la figura de una violación permanente a un derecho, específicamente en lo que refiere a la desaparición forzada de personas⁶.

En el presente caso Naira aceptó la competencia de la Corte en el año 1979, mientras que ratificó la Convención Belém do Pará en el año 1996, entre otros tratados de DDHH. En consecuencia, al haberse producido el presunto incumplimiento a las obligaciones contenidas en el art. 7 de dicho instrumento en 1992 – consistente en presuntos abusos y violencia sexual contra Mónica y María Elena Quispe –, resulta la incompetencia de la Corte para pronunciarse al respecto.

Por todo lo expuesto anteriormente, se le solicita a la Corte que pronuncie admisible la presente excepción preliminar y no se declare sobre el fondo de la cuestión en lo relativo a las obligaciones del art. 7 de la Convención Belém do Pará respecto a María Elena y Mónica Quispe.

En caso de que la Corte IDH desestime las excepciones preliminares oportunamente interpuestas, el Estado somete en forma subsidiaria, los alegatos para las cuestiones de fondo.

2) Análisis de fondo

El Estado de Naira no ha violado las obligaciones contenidas en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará

⁵**Corte IDH.** Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 24.; Corte IDH, *op. cit.* 3.b, párr.84.

⁶**Corte IDH.** Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 37.

La Corte IDH ha indicado en el caso “Castro Castro Vs. Perú”⁷ que el art. 7 de la Convención de Belém Do Pará instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En este sentido, el art. 1 de este instrumento internacional define a la violencia contra la mujer en los siguientes términos: “(...) *debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.*”⁸.

En consecuencia, resulta oportuno mencionar que el Tribunal Interamericano ha señalado en reiterada jurisprudencia que “*no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará*”⁹, no pudiendo advertirse de los hechos del caso que las víctimas hayan acreditado las afectaciones a derechos humanos alegadas y menos aún que las mismas tuvieron como principal sustento un motivo de género. Tampoco se ha especificado en qué forma las presuntas situaciones acaecidas en el año 1992 en Warmi han afectado de manera especial a las hermanas Quispe. No obstante ello, y con miras a investigar y llegar a la verdad de lo ocurrido, Naira decidió investigar los sucesos excediendo lo alegado por las peticionarias e incluyendo como posibles víctimas a hombres y niños¹⁰.

De la misma forma y como oportunamente también esta Corte lo destacara, los representantes de las víctimas no han identificado cuales serían “las medidas apropiadas” que de conformidad con lo previsto por el art. 7.b) de la Convención, el Estado habría dejado de adoptar. En este caso

⁷**Corte IDH.** Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 346, y Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar), y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 275.

⁸**Convención de Belém do Pará art. 1:** “...cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

⁹**Corte IDH.** “Ríos y otros vs. Venezuela”. Sentencia 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. párr. 279.

¹⁰**Caso María Elena y Mónica Quispe Vs. República de Naira.** pregunta aclaratoria no. 50.

“para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”¹¹, destacándose que conforme surge de los hechos del caso, ninguna de las medidas adoptadas por el Estado – creación de programas administrativos y órganos especiales de investigación, capacitación obligatoria de funcionarios judiciales, reparaciones económicas y simbólicas, diseño de políticas públicas – resultaron adecuadas para Killapura. En concordancia con ello, esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que *“las disposiciones del art. 7.b de la Convención Belém do Pará especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como la obligación de garantizar el derecho reconocido en el art. 5 de la Convención Americana. En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyen violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual”¹²*.

Como se ha señalado anteriormente, el Estado de Naira aún está investigando las presuntas violaciones alegadas por las hermanas Quispe, no advirtiendo, en el curso de las mismas, situaciones de discriminación o violencia motivadas en su género, que conlleve al Estado a cumplir su deber de investigar con un alcance adicional y reforzado ¹³.

Así, y a los fines de poder determinar la responsabilidad del Estado, debe considerarse si en el caso en concreto existió una situación de riesgo para María Elena y Mónica, y en su caso, si pudo Naira en el marco de sus atribuciones adoptar las medidas necesarias, debiendo considerarse la

¹¹Óp. cit. 8, párr. 280.

¹²Óp. cit. 6.b, párr. 275; **Corte IDH**. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 352.

¹³Óp. cit. 2, párr. 293.

omisión de todo tipo de comunicación en relación a los hechos alegados, lo que imposibilitó que la adopción de medidas preventivas y de reparación.

Por otro lado, según la CIDH *“El art. 7 de la Convención de Belém do Pará establece las obligaciones inmediatas del Estado en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales y legislación para evitar la impunidad: En la esfera de la administración de la justicia, establece explícitamente que los Estados deben “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos” y “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (...)”*¹⁴. En consonancia, el TEDH ha manifestado que *“Por consiguiente, la violencia basada en el sexo provoca obligaciones en los Estados (...) Estas incluyen una obligación de parte de los Estados para que “adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia entre ellas, medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia”*¹⁵.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha indicado *“esos recursos deberían incluir diferentes formas de reparación, como la indemnización monetaria, la restitución, la rehabilitación y la reintegración; medidas de satisfacción, como las disculpas públicas, los memoriales públicos y las garantías de no repetición; cambios en las leyes y*

¹⁴**CIDH.** OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68. “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas”. 20 enero 2007, párr. 27.

¹⁵**TEDH.** Opuz vs. Turquía. Demanda N° 33401/02. Sentencia del 9 de junio de 2009, párr. 74.

prácticas pertinentes y el enjuiciamiento los autores de violaciones de los derechos humanos de la mujer”¹⁶.

En observancia de lo anterior, el Estado de Naira ha creado el programa “Políticas de Tolerancia Cero a la Violencia de Género”, al cual se le ha asignado una partida presupuestaria para ser implementado de inmediato¹⁷. Es pertinente señalar que se ha invitado a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres y asociaciones de víctimas a participar y enviar sus propuestas. El mismo incluye: la creación de una Unidad de Violencia de Género en la Fiscalía y el Poder Judicial – a quienes se les concedió la facultad de sancionar a aquellos representantes públicos que cometan actos de violencia de género y discriminación¹⁸ –, así como también capacitación y formación obligatoria en violencia de género para jueces, fiscales y demás funcionarios y funcionarias¹⁹, lo cual fue valorado por éste Tribunal en la sentencia “Fernández Ortega y otros Vs. México”²⁰. Además Naira se ha comprometido a revisar la legislación en materia de discriminación, violencia e identidad de género. Igualmente, estableció un Programa Administrativo de Reparaciones y Género, por el que se implementarán medidas de reparación de índole económico, laboral, habitacional como de salud física y mental, para las víctimas de cualquier forma de violencia de género, priorizando femicidios y violaciones²¹. También, respecto de los niños y niñas nacidos de violaciones sexuales, dispuso su anotación en el Registro Público del PTCVG. Por último, erigió un Comité de Alto Nivel, cuya función primordial es explorar los casos de violencia de género para su posible reapertura, y una

¹⁶**CEDAW/C/GC/28**. Recomendación general no. 28 relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 16 de diciembre de 2010, párr. 32.

¹⁷*Óp. cit. 10, párr. 19.*

¹⁸*Ibíd.*, párr. 20.

¹⁹*Ibíd.*, pregunta aclaratoria no. 1.

²⁰**Corte IDH**. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. párr. 259.

²¹*Óp. cit. 10, párr. 22.*

Comisión de la Verdad, que se encuentra compuesta por todos los sectores de la sociedad²², para conocer la verdad de los hechos y garantizar la efectiva protección de los derechos ya que, la misma, al finalizar su informe, dispondrá de un fondo especial de reparaciones que ofrecerá además, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, medidas de restitución y reparaciones pecuniarias²³.

Por lo expuesto anteriormente, el Estado le solicita a este honorable Tribunal que declare que no se han incumplido las obligaciones que devienen del art. 7 de la Convención Belém do Pará en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe.

El Estado de Naira no ha violado los derechos contenidos en los arts. 4, 5 y 6 de la CADH en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento.

El art. 4 de la CADH establece la protección a la vida de todas las personas, mientras que, el art. 5 de dicho instrumento consagra el derecho que tiene todo individuo a que se respete su integridad personal. A la vez, el art. 6 de la CADH dispone la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos. Al respecto, este Tribunal, en casos como “Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia” y “Villagrán Morales Vs. Guatemala” ha sostenido que en relación a los derechos mencionados que *“no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en el art. 1.1 de la Convención Americana”*²⁴.

Por otro lado la Corte, en su constante jurisprudencia, ha reconocido el derecho a la ‘vida digna’, el cual conlleva a los Estados a *“adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo*

²²*Ibíd.*, pregunta aclaratoria no. 65.

²³*Ibíd.*, párr. 34.

²⁴**Corte IDH.** Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 188; **Corte IDH.** Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 139.

*adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho*²⁵. En este sentido, dicho Tribunal ha explicado que *“una de esas condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida y a la integridad personal es el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones a los mismos, el cual se deriva del art. 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado*²⁶, compromiso que ha sido debidamente llevado a cabo por el Estado de Naira a través de diversas medidas que se adoptaron al respecto²⁷.

Además, nace de la jurisprudencia interamericana, que *“de la Convención contra la Tortura surgen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado*²⁸. Igualmente, el Comité contra la Tortura ha expresado en su Obs. Gral. no. 1 que el autor de una denuncia debe presentar un caso “defendible”, lo que implica que debe tener argumentos suficientes para exigirle al Estado en cuestión una respuesta²⁹.

²⁵**Corte IDH.** Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. párr. 153.

²⁶**Corte IDH.** Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147.

²⁷*Op. cit.* 9, párrs. 56, 60, 65, 88. Preguntas Aclaratorias no. 3, 13 y 39.

²⁸**Corte IDH.** Caso Vélez Lóor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr.240; *op. cit.* 6, párr. 347; Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. párr. 75.

²⁹**Comité contra la Tortura:** Observación general no. 1: “Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención”.21 de Noviembre de 1997, párr. 5.

En el caso *subjudice*, obsérvese que el Estado tomó conocimiento de la situación de Mónica y María Elena Quispe³⁰, no por la vía judicial, sino por un medio de comunicación³¹, luego de que Mónica diera una entrevista televisiva; es decir que no se radicaron las denuncias correspondientes al tiempo de acaecimiento de los hechos, ni luego de ello, lo que impidió que las autoridades estatales tuvieran conocimiento de lo ocurrido³². En cuanto a la existencia de razón fundada de que se pudieron haber cometido hechos de tortura, es pertinente aclarar que los sucesos fueron negados por las autoridades de la localidad de Warmi quienes *“emitieron un pronunciamiento público negando los hechos, diciendo que nunca hubieran permitido una situación de esa naturaleza en su comunidad y que GTV y Killapura estaban desprestigiando al pueblo”*³³. Téngase en cuenta que la gran mayoría de vecinos y vecinas respaldaron a sus autoridades en esta declaración³⁴. Así, no surge de los hechos del caso que existiera una situación generalizada de violencia, ni que los integrantes de la BME pudieran haber realizado actos de tortura, o la existencia de indicios que pudieran hacer sospechar que la misma se estaba produciendo. Además, es necesario señalar que la Corte ha explicado que *“las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos*

³⁰*Op. cit.* 9, párr. 27.

³¹*Ibid.*, pregunta aclaratoria no. 8.

³²*Ibid.*, párr. 27.

³³*Ibid.*, párr. 32.

³⁴*Ibid.*, párr. 32.

determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo”³⁵.

En otro orden de ideas, en el período en que Warmi estuvo bajo el control de la BME, el Estado de Naira dio acabado cumplimiento de los estándares internacionales comunicando al secretario de la OEA los derechos que fueron suspendidos durante la declaración del estado de emergencia³⁶, no surgiendo de los hechos del caso que estuviesen suspendidas las garantías judiciales indispensables para el funcionamiento de la justicia, entre ellas el *habeas corpus*³⁷, el cual no fue utilizado por las hermanas Quispe ni por ninguna otra persona para conocer su situación de detención, lo que fortifica lo señalado por las autoridades de Warmi en cuanto a la inexistencia de los hechos y, para el caso de que hayan existido, limita el accionar del Estado al no haberse puesto en conocimiento de ninguna autoridad lo que estaba sucediendo.

Este Tribunal, en el caso “Ximenes Lopes Vs. Brasil” ha explicado que “[la] obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, una de esas condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida y a la integridad personal es el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones a los mismos, el cual se deriva del art. 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado”³⁸.

³⁵Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. párr. 186.

³⁶CADH. Artículo 27.

³⁷Óp. cit. 10. Pregunta aclaratoria no. 81.

³⁸Óp. cit. 25, párr.147.

Asimismo, la Corte ha entendido que una investigación es efectiva cuando “*el Estado (...) inicia de oficio e inmediatamente una investigación (...) que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables*”³⁹. En este sentido, es que el Estado inició investigaciones de oficio por denuncias anteriores en medios de comunicación por violaciones a los DDHH⁴⁰.

Por otro lado, el Estado de Naira tiene conocimiento de que las violaciones sexuales son actos traumáticos que pueden llegar a tener graves consecuencias para la integridad psicofísica⁴¹, es por ello que el Estado ha tipificado en su código penal el delito de violencia sexual y feminicidio con graves penas⁴², e inmediatamente luego de conocer la situación de las hermanas Quispe, puso su aparato gubernamental a investigar los hechos denunciados. En referencia al art. 6 de la CADH que dispone que “*nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre [...]*”⁴³, la Corte ha manifestado que “*dicha prohibición posee un rol imprescindible en la Convención Americana, ya que encarna una de las violaciones más graves de la dignidad de la persona humana y, es por ello que los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir que se den ese tipo de situaciones*”⁴⁴. Diferentes Tribunales internacionales se han expresado al respecto, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, precisó que “*en el derecho internacional contemporáneo la protección contra la esclavitud, y contra la discriminación racial, es una obligación internacional erga omnes, derivada “de los principios y reglas relativos a los derechos básicos de la persona humana” y, por lo tanto, atañe a todos los*

³⁹**Corte IDH.** Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005 Serie C No. 132, párr.54.

⁴⁰*Óp. Cit. 10*, pregunta aclaratoria no. 43.

⁴¹**TEDH.** Aydın vs. Turquía. Demanda N° 23178/94. Sentencia del 25 de septiembre de 1997, párr. 83.

⁴²*Óp. Cit. 10*, Pregunta aclaratoria no. 4 y párr. 14.

⁴³**Convención Americana sobre Derechos Humanos.** Artículo 6.1.

⁴⁴**Corte IDH.** Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, párr. 317.

*Estados*⁴⁵, en el caso de la “Barcelona Traction, Light and Power Company Limited”. También el TEDH ha sostenido en el caso “Rantsev Vs. Chipre y Rusia” que “*para que surja una obligación positiva de adoptar medidas operativas en las circunstancias de un asunto concreto, debe demostrarse que las autoridades del Estado conocían, o debían haber conocido, circunstancias que permitían albergar una sospecha plausible de que un individuo identificado se había encontrado, o se encontraba, en un riesgo real e inminente de ser objeto de trata o de explotación*”⁴⁶. Esta línea ha sido la seguida por la Corte IDH, en casos como Caso Masacres “de Río Negro Vs. Guatemala”⁴⁷.

Cabe destacar que, en razón de ello el Estado, inmediatamente después de haber tomado conocimiento por medio de la denuncia televisiva de los que presuntamente le acaeció a las hermanas Quispe, decidió “*(crear) una Comisión de la Verdad (CV) compuesta por representantes del Estado y de la sociedad civil, la cual asumirá con carácter de urgencia la investigación de los hechos*”⁴⁸. La misma se encuentra realizando trabajos de investigación, entrevistas y recojo de testimonios en las zonas afectadas por los hechos de violencia que vivió el Estado de Naira entre 1970 y 1999. La Comisión prevé que su informe final estará listo en 2019⁴⁹, cuyo fin es recabar toda la información posible respecto de los hechos ocurridos (con especial énfasis en investigar el contexto y los casos de violación de derechos humanos, particularmente, los casos de violencia sexual⁵⁰) y sus responsables, para que una vez que la información se encuentre recopilada, sea posible proceder judicialmente y conocer la verdad de lo sucedido.

⁴⁵**Corte Internacional de Justicia.** Caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Sentencia de 5 de febrero de 1970, p. 32, párrs. 33-34.

⁴⁶**TEDH.** Rantsev Vs. Chipre y Rusia, (núm. 25965/04). Sentencia de 7 de enero de 2010, párr. 286.

⁴⁷**Corte IDH.** *Op. cit.* 5, párr. 141.

⁴⁸ *Óp. Cit.* 10, Párr. 34.

⁴⁹*Ibíd.*, Pregunta aclaratoria no. 15.

⁵⁰*Ibíd.*, Pregunta aclaratoria no. 65.

El Estado, del mismo modo que ha iniciado las investigaciones pertinentes a fin de poder determinar con la certeza necesaria la comisión de violaciones a derechos humanos de las hermanas Quispe, las han incluido en el grupo de políticas denominadas “PTCVG” que incluyen el “Programa Administrativo de Reparaciones”, el cual brindará medidas de tipo económico, así como también salud pública física y mental, vivienda, educación y trabajo para garantizar una plena protección a su integridad personal, y en consecuencia, una vida digna.

Por lo anteriormente expuesto, el Estado de Naira le solicita al honorable Tribunal que declare que no se han violado los derechos contenidos en los arts. 4, 5 y 6 de la CADH en relación con el art. 1.1 de dicho instrumento, respecto de María Elena y Mónica Quispe.

El Estado de Naira no ha violado el derecho contenido en el art. 7 de la Convención Americana en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento.

Mientras que el art. 7.1 de la CADH consagra el derecho a la libertad y a la seguridad personal, los restantes incisos regulan las diversas garantías que deben respetarse en los casos en que se vea limitada la libertad de un individuo⁵¹. Así, éste Tribunal ha fijado el criterio entorno a la libertad personal, derivada del art. 7.1, conforme al cual la protección de la libertad salvaguarda tanto la protección de la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal⁵². En consecuencia, Estado de Naira ha asumido la obligación internacional en cumplimiento de estos estándares de protección en todo su territorio y respecto de todas las personas que habiten el mismo.

⁵¹Misuraca, M. “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal”. *La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino*, pág. 93.

⁵²*Óp. Cit* 23. Párr. 135.

En el presente caso, como consecuencia de lo denunciado por Killapura en representación de las presuntas víctimas, el Estado tomó conocimiento de la posible afectación de la integridad personal y seguridad de las Sras. Quispe adoptando todas las medidas que se encontraban a su alcance. Entre ellas pueden mencionarse la creación del Comité de Alto Nivel y la CV⁵³, quienes tienen bajo su órbita la misión de investigar lo sucedido entre 1970 y 1999 y examinar si las medidas desarrolladas en este periodo de tiempo resultaron compatibles con la CADH, no resultando posible contrarrestar lo alegado por las supuestas víctimas con los datos que estos órganos están recogiendo en virtud de que los mismos se encuentran en plena etapa de ejecución y sus informes estarán listos en 2019, a lo que debe sumarse la inexistencia de otro medio probatorio que permita acreditar lo alegado pese al indicio de veracidad que el Estado ha otorgado a lo expuesto por Killapura en representación de las hermanas Quispe y que fuera uno de los motivos por los cuales Naira con debida observancia de las obligaciones contenidas en el 1.1. de la CADH, arbitrara los medios para llevar adelante una seria y efectiva investigación. En este sentido, la CIDH, en su informe *“Derecho a la verdad en las américas”*, ha entendido que *“de manera complementaria a los procesos judiciales, las actividades llevadas a cabo por las CV permiten avanzar en la construcción colectiva de la verdad sobre violaciones de derechos humanos, tomando en cuenta el marco histórico, social y político”*⁵⁴.

Resulta propicio mencionar, que *“con la finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos, el Estado legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales*

⁵³Óp. Cit. 10, Preguntas aclaratorias no. 1 y 3; párr. 34.

⁵⁴CIDH.OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2. 13 agosto 2014. “Derecho a la verdad en las américas”, párr. 127.

en el espacio público”⁵⁵, hasta la adopción de medidas extremas como la suspensión de derechos de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

Naira declaró el estado de emergencia cumpliendo con los requisitos exigidos por normas internacionales, en este sentido “*el art. 27 de la Convención Americana regula la suspensión de garantías en los casos de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado Parte, para lo cual éste deberá informar a los demás Estados Partes por conducto del Secretario General de la OEA, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión*”⁵⁶.

La libertad personal es un derecho cuya suspensión se encuentra autorizada por la CADH, afirmando esta Corte que “*los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el Art. 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática [y que] aquellos ordenamientos constitucionales y legales de los Estados Partes que autoricen, explícita o implícitamente, la suspensión de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que a esos Estados impone la Convención*”⁵⁷. De este modo, “*La Corte ha señalado que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de*

⁵⁵**Corte IDH.** Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 86.

⁵⁶**Corte IDH.** Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 50.

⁵⁷**Convención Americana Sobre Derechos Humanos:** arts. 27.2, 25.1 y 7.6; **Corte IDH.** Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párrs. 42 y 43).

*excepción*⁵⁸, circunstancias que no pueden corroborarse en el presente caso, así como tampoco las supuestas violaciones a las garantías previstas en el art. 7 de la CADH, ante la ausencia de comunicación al Estado de la situación que atravesaron las posible víctimas⁵⁹, resultando asimismo imposible por Naira poder advertir en esta instancia si la actuación de los funcionarios públicos estuvo fuera de los límites convencionalmente permitidos.

Ésta situación, se ve contrarrestada con el impulso a través de diversas medidas que Naira ha efectuado a las tareas de prevenir e investigar para echar luz sobre las situaciones alegadas, entre ellas dentro de la órbita del Poder Judicial, la capacitación en materia de violencia de género y discriminación de funcionarios y funcionarias.

Asimismo, en su constante jurisprudencia, este Tribunal ha entendido que a los efectos de que una privación de la libertad en contexto de estado de emergencia sea legítima, el Estado en cuestión debe cumplir una serie de requisitos, a saber: *“no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”*⁶⁰. Seguidamente, la Corte ha explicado que *“ii) las medidas adoptadas [deben ser] las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) [deben ser] necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas*

⁵⁸**Corte IDH.** Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 72

⁵⁹*Óp. cit.* 10. Pregunta aclaratoria no. 8.

⁶⁰**Corte IDH.** Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 93.

aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto”⁶¹. Por último, ha especificado “*el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales*”⁶², de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida”⁶³.

Sobre el primer punto, es necesario recordar que Warmi se encontraba intervenida y bajo el mando de la BME, cuyo fin específico era contrarrestar las acciones de las “Brigadas por la Libertad” -compuestas por grupos vinculados al narcotráfico- quienes se encontraban infringiendo acciones de terror y, asimismo, proteger a la población de esos actos terroristas⁶⁴. Así, bajo ese contexto, las hermanas Quispe fueron detenidas por la BME, con acusaciones de entregar información sobre la base militar a las BPL⁶⁵, siendo las medidas adoptadas en relación a ellas necesarias, idóneas y proporcionales para el fin buscado por el Estado. En relación a la presunta incomunicación de la que fueron objeto, el Tribunal Interamericano ha destacado en “Suárez Rosero Vs. Ecuador” que “*la incomunicación (...) tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos*”⁶⁶. La detención de las posibles víctimas y su incomunicación era la única forma de conseguir el fin deseado –es decir, el cese de la divulgación de información a las BPL por parte de las Sras. Quispe y el desarrollo de la

⁶¹Óp. Cit.54, párr. 90 y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111.

⁶²Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. Véase también: Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197.

⁶³Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228.

⁶⁴Óp. cit. 10, párr. 8.

⁶⁵Ibíd., pregunta aclaratoria no. 42.

⁶⁶Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 51.

investigación de los delitos cometidos por las presuntas víctimas y las BPL- dada la inexistencia de una medida menos gravosa que impidiera que el grupo narcotraficante continuara recibiendo comunicaciones de los nuevos movimientos de la BME radicada en Warmi. Por ende el accionar del Estado resulta absolutamente necesario, adecuado e indispensable así como también guarda total correspondencia con el propósito de la presunta detención.

Por los argumentos expuestos, el Estado de Naira solicita al honorable Tribunal que declare que no se ha violado el derecho consagrado en el art. 7 de la CADH en relación al art. 1.1 en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe.

El Estado Naira no ha violado los derechos contenidos en los arts. 8 y 25 de la CADH en relación al art. 1.1 de dicho instrumento.

El art. 8 de la CADH consagra las garantías del debido proceso, mientras que el art. 25 establece el derecho a la protección judicial. Al respecto, la Corte IDH ha expresado que *“los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), (...) sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general (...) de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)”*⁶⁷. Por ello, Naira procederá a analizar ambos arts. de manera conjunta.

En el presente caso, luego de que los presuntos hechos ocurridos a las hermanas Quispe llegaran a conocimiento de la ONG Killapura a través de una entrevista televisiva, ésta decidió –con conformidad de las presuntas víctimas– interponer una denuncia, la cual fue rechazada debido a

⁶⁷**Corte IDH.** Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; **Corte IDH.** Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, párr. 97.

que la acción penal ya se encontraba prescripta⁶⁸. En relación a lo anterior, se debe recordar que se desprende de la jurisprudencia interamericana que *“por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, (...) que no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y Tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado”*⁶⁹.

Puntualmente, respecto del plazo para la prescripción de una acción penal, la Corte ha manifestado en su sentencia del caso “Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador” que *“la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores”*⁷⁰.

Así, en el ordenamiento jurídico de Naira, el art. 82 dispone que *“Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan (...) En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó”* conforme al cual los hechos de violencia sexual acaecidos presuntamente en Naira prescriben a los 15 años desde producidos.

Asimismo, vale destacar que conforme surge del art. 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, rige en materia de Derecho Internacional el principio de irretroactividad de los tratados, en virtud del cual *“las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de*

⁶⁸Óp. Cit. 10, párr. 33.

⁶⁹**Corte IDH.** Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 126.

⁷⁰**Corte IDH.** Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 111.

entrada en vigor del tratado para esa parte (...)»⁷¹. De esta forma, y conteste con los hechos del caso, las obligaciones que las hermanas Quispe alegan incumplidas por parte del Estado de Naira no resultaban oponibles al tiempo en que los mismos presumiblemente se produjeron, debiendo considerarse el momento en el cual comenzaron a surgir las obligaciones a cargo del Estado y no cuándo sucedieron las situaciones alegadas. Así se ha señalado que *“Si el comportamiento ha comenzado antes de que la obligación entre en vigor para el Estado y continúa desarrollándose posteriormente, habrá violación de dicha obligación desde el momento en que ésta haya comenzado a existir para el Estado”*⁷².

Dentro de las competencias propias del Estado se encuentra presente la de adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes según lo previsto por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, y en caso de que exista, sea abolida.

La temática de imprescriptibilidad emerge de normas convencionales como la mencionada y también de reglas establecidas con carácter consuetudinario. Para probar el carácter consuetudinario habría que demostrar que existe una práctica internacional en ese sentido, y que además hay una conciencia internacional de la obligatoriedad de esa práctica. Esta Corte Interamericana ha sostenido que *“la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace*

⁷¹ **Convención de Viena sobre derecho de los tratados**. 1969. Artículo 28;

⁷² **ONU**: Doc. NNUU: A/5809, Anuario CDI 1976, vol. II (primera parte), p. 23 en **Chinchón Álvarez, J.**: “Principio de irretroactividad de los tratados, hechos continuados y competencia *ratione temporis*. Debates pasados, presentes y futuros en el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, en Torres Bernárdez, s., Fernández Rozas, J.C., Fernández de Casadevante, c., Quel López, J., y López Martín, A.G. (coords.): *El Derecho internacional en el mundo multipolar del siglo XXI. Obra homenaje al Profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez*, Iprolex, Madrid, 2013, páginas 695-711, (ISBN: 978-84- 941055-0-0).

con tal Convención sino que está reconocida en ella”⁷³. En este sentido, la aplicación general de los principios del derecho penal conduciría a sostener una respuesta contraria a lo postulado por este Tribunal en el año 2006, a consecuencia de la vigencia de principio de no aplicación retroactiva de normas en materia penal. De acuerdo a lo previsto por el art. 24 del Estatuto de la Corte Penal Internacional “*Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor*”⁷⁴. Conforme surge de los hechos del caso, al momento de presuntamente producirse la afectación de derechos de las hermanas Quispe, había previsto un plazo de prescripción - de acuerdo al contenido de la pregunta aclaratoria no. 82 - que no se veía afectado por el Derecho Internacional (por la inexistencia de un criterio jurisprudencial vinculante al respecto, dado que los mismos acaecieron en 1992), no pudiendo los posteriores pronunciamientos dictados por este Tribunal afectar aquella prescripción originariamente prevista.

Por otro lado, esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que “*considera que [la] falta de investigación de todas las violaciones a los derechos humanos de las cuales es responsable el Estado constituye una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, en tanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares*”⁷⁵.

Sin embargo, a pesar de que no se dio curso a la acción penal intentada, el Estado –teniendo en cuenta el pedido de las presuntas víctimas y de la ONG– inmediatamente después de tomar

⁷³**Corte IDH.** Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 153.

⁷⁴**Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional**, artículo 24.

⁷⁵ **Corte IDH.** *óp. cit.* 6, párr. 347.

conocimiento de la situación, anunció la creación de un Comité de Alto Nivel que actualmente se encuentra en funcionamiento⁷⁶.

Cabe destacar que si bien dicho Comité ha sido creado por el Poder Ejecutivo, éste no realiza actividad jurisdiccional sino que se limita a explorar la posible reapertura de los casos penales *“respetando así garantías de independencia judicial (...), la Corte recuerda que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces, cuyo objetivo radica en evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial”*⁷⁷.

Asimismo, se implementó una CV compuesta por representantes del Estado, la sociedad civil y representantes de las comunidades indígenas – integración que revela la capacidad y sensibilidad del Estado por comprender la gravedad del fenómeno – cuyo fin es recabar toda la información posible sobre el contexto y las posibles violaciones a derechos humanos que se dieron durante la época de 1970 a 1999. De esta forma, ofrece reparaciones de índole administrativo e incorpora medidas de satisfacción, reparaciones pecuniarias y medidas de rehabilitación y restitución⁷⁸, cumpliendo así con el estándar dictado este Tribunal en la sentencia al caso “Heliodoro Portugal Vs. Panamá”, quien ha indicado que *“La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales (...)y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la*

⁷⁶Óp. Cit. 10, párr. 34.

⁷⁷Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 186.

⁷⁸Óp. Cit. 10, pregunta Aclaratoria no. 65.

reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos ”⁷⁹ y por la CIDH, quien ha identificado a “ *la investigación como una etapa crucial en casos de violencia contra las mujeres, y ha afirmado que no se puede sobrestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas a ese respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, procesar y castigar a los responsables* ”⁸⁰.

Incluso, las hermanas fueron incorporadas al programa de medidas “PTCVG” que abarcan un Programa Administrativo de Reparaciones y Género por el cual se implementaran medidas de reparación, entre las cuales se encuentran medidas de tipo económico, de salud física y mental así como de educación, vivienda y trabajo⁸¹, brindándoles así protección y garantía integral de sus derechos. En atención a ello, corresponde señalar que el Honorable Tribunal, ha manifestado la importancia de que el Estado adopte diversas diligencias para contribuir a la recolección de pruebas. En efecto, en el caso “Castro Castro Vs. Perú” el mismo ha señalado que “*reconoce que el Estado (...) se encuentre desarrollando procesos penales en la jurisdicción ordinaria, en los que figuran como imputados personas que en la época de los hechos desempeñaban altos cargos [.]*”⁸², medidas que se encuentran en curso en el Estado de Naira.

En el caso “Durand Ugarte vs. Perú”, la Corte ha manifestado que si bien el Estado en cuestión no había suspendido de manera expresa el recurso de *habeas corpus*, el cumplimiento que se dio a las disposiciones que determinaban los derechos suspendidos, tornó a dicho recurso en ineficaz⁸³. En contraposición, en el caso bajo análisis, no surge de los hechos que dichas

⁷⁹**Corte IDH.** Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186., párr. 144 y 146.

⁸⁰**CIDH,** “Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de Violencia y Discriminación”, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003, párr. 137.

⁸¹*Óp. Cit. 10,* párrs. 22 y 34.

⁸²**Corte IDH.** *op. cit 6,* párr.388.

⁸³**Corte IDH.** Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. párr. 93.d.

garantías indispensables estuvieran derogadas. Por el contrario, el Poder Judicial aunque se encontraba intervenido, continuaba desarrollando sus actividades habituales y por ende, recibiendo denuncias⁸⁴. En consecuencia, si bien los arts. 8 y 25 se encontraban suspendidos, las presuntas víctimas pudieron haber recurrido a la justicia para denunciar la situación en la que se encontraban -ya que disponían de las garantías indispensables para el funcionamiento de la actividad jurisdiccional- pero, en cambio, decidieron no hacerlo aún luego de haberse desactivado la BME. En efecto, este honorable Tribunal no debería pronunciarse respecto de los derechos contenidos en los arts. bajo análisis⁸⁵. Es menester señalar que Naira considera de extrema importancia las investigaciones que se están efectuando, porque *las violaciones masivas y sistemáticas tienen un vínculo estrechísimo con la democracia, mirada desde sus elementos más básicos como un sistema de gobierno*”⁸⁶.

Por último, el Estado, tiene conocimiento de que *“la Corte tiene facultades para, en el marco de un caso de violaciones aisladas, examinar la compatibilidad de la declaración de emergencia hecha por un Estado que autoriza el art. 27 de la Convención y la compatibilidad de las medidas que éste tome durante la situación de emergencia. Si del examen se concluye que la declaración de emergencia en un Estado o el tipo de medidas tomadas como consecuencia de ella violan el art. 27, los efectos de la sentencia trascenderán el caso particular, porque se estará deslegitimando la base misma que las permite*”⁸⁷. En base a lo anterior, más allá de la resolución interna en la que suspendió legalmente los arts. 7, 8 y 25 de la CADH⁸⁸ para intentar

⁸⁴*Óp. Cit. 10*, párr. 9.

⁸⁵**Corte IDH.** Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párrs. 89,90 y 91.

⁸⁶**C. MEDINA QUIROGA y C. NASH ROJAS:** “Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección”. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Centro de Derechos Humanos. Andros Impresores. Abril 2007, págs.103 a 105.

⁸⁷*Ibíd.*

⁸⁸ *Óp. Cit. 10*, pregunta aclaratoria, no. 10.

contrarrestar las acciones de terror que llevaba a cabo el grupo armado “Brigadas por la Libertad”⁸⁹, se reconoce la vigencia de una norma de Derecho Internacional, cuyo contenido, no puede ser vulnerado por una resolución de derecho interno, y que *“cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y libertades”*⁹⁰. Además, la Corte ha afirmado que *“el concepto de debido proceso legal recogido por el art. 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el art. 27 de la misma”*⁹¹.

Por todo lo expuesto, el Estado solicita a este honorable Tribunal que declare que no se han vulnerado los derechos contenidos en los arts. 8 y 25 de la CADH, en relación al art. 1.1 del mismo instrumento respecto de María Elena y Mónica Quispe.

III) Petitorio

Por todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente, el Estado de Naira solicita a la Honorable Corte IDH que: a) Admita la excepción preliminar oportunamente interpuesta; b) Subsidiariamente declare que no se han violado los derechos consagrados en los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 25 de la CADH y las obligaciones contenidas en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará, respecto de María Elena y Mónica Quispe, todos aquellos en relación al art. 1.1 de la CADH; c) Desestime las reparaciones y costas solicitadas por las presuntas víctimas.

⁸⁹*Ibíd.*, párr. 9.

⁹⁰**Corte IDH.** Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). **Opinión Consultiva OC-9/87** de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9. Párr. 39.

⁹¹*Ibíd.*, párr. 29; **Corte IDH.** Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Sentencia de 4 de marzo de 2011. (fondo, reparaciones y costas). Serie C No. 223. párr. 75; *Óp. Cit.* 66, Párr. 64.